

AUMENTA LA IMPUNIDAD EN EL SALVADOR, OTORGANDO INMUNIDAD A QUIENES PROMUEVEN IRREGULARIDADES, OPACIDAD Y CORRUPCIÓN.

El día de ayer, 5 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley para el uso de productos para tratamiento médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19”. Esta Ley, propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, por medio del Ministro de Salud, Francisco Alabí, tiene como objetivo evadir investigaciones sobre compras irregulares, realizadas para la atención de la emergencia fuera del marco legal de adquisiciones.

La denominada “Ley Alabí”, en su artículo 4, otorga inmunidad ante denuncias judiciales y administrativas, y exime de responsabilidad civil, penal o comercial a quienes hayan participado en compras o contrataciones irregulares durante la pandemia. Asimismo, crea un sistema para evadir las reglas de las compras públicas según lo exige la Constitución y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), dejando abierta la puerta para la discrecionalidad en el uso de fondos públicos. Adicionalmente, ya existe figura para la *Contratación Directa* para Estado de Emergencias, Calamidad, Desastre, Guerra o Grave Perturbación del orden dictado por autoridad competente, por lo que no es justificable la necesidad de un nuevo cuerpo normativo, menos si se trata de uno que amplía la posibilidad de arbitrariedades.

Gracias al trabajo de la prensa independiente, se han desnudado diversos casos de posible corrupción que han tenido lugar en el país durante la emergencia por COVID-19. También se han conocido los señalamientos a funcionarios de diferentes carteras desde la Fiscalía General, la Corte de Cuentas y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) por irregularidades o anomalías detectadas en el uso de los fondos de emergencia. Sin embargo, la respuesta de las autoridades, principalmente del Ejecutivo, ha sido de restricción al acceso a la información y omisión de mecanismos de rendición de cuentas.

Desde FUNDE, Capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador, condenamos la aprobación de una ley que es contraria a los valores de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción, las cuales contienen compromisos adquiridos por El Salvador, que mandatan crear sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficientes para prevenir la corrupción.

La aprobación de esta ley se suma a otras acciones reprochables que se han visto desde el Ejecutivo y el Legislativo en los últimos días, que erosionan el acceso a la justicia y promueven la impunidad, lo cual afecta los derechos y la calidad de vida de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Ninguna emergencia debe utilizarse como excusa para la creación de normas que faciliten la corrupción y que perpetúen la impunidad.

San Salvador, 06 de mayo de 2021.



PBX: (503) 2209-5300 / 2209-5301



Calle Arturo Ambrogio #411, entre 103 y 105
Av. Norte, Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.



@fundeorg

www.funde.org